



PROYECTO DE SENTENCIA DEL C.  
MTRO: LIC. MARIANO AZUELA.  
Srto: Lic. Víctor Manuel Franco.

AMPARO DIRECTO 5031/47  
CARLOS R. CANTU Y CAIGS.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al día primero de octubre de mil novecientos cincuenta y tres.

Vo.Bo.del Ponente Mtro. Mariano Azuela V I S T O, para pronunciar sentencia el expediente número 5031/47 relativo al juicio de amparo directo promovido por el señor Carlos R. Cantú y coagraviados contra actos del Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, y

#### R E S U L T A N D O :

PRIMERO.- El acto reclamado consiste en la sentencia definitiva pronunciada en 6 de mayo de 1947 por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en la apelación interpuesta en el interdicto sobre recuperar y retener la posesión, respectivamente, de dos porciones de terreno, promovido por los señores Carlos R., Jesús María y Lucas Cantú contra las señoras Elisa Juangorena Vda. de Escamilla y Ofelia Escamilla de Acuña, señoritas María de la Luz y Elisa Escamilla y señor Humberto Escamilla, confirmando la sentencia pronunciada por el Juez Primero de Letras del Ramo Civil de Monterrey, N.L., que absolvió a los demandados.

SEGUNDO.- Los señores Carlos R., Jesús María y Lucas Cantú solicitan la protección de la Justicia Federal y, para fundar su demanda de amparo, expresan los conceptos de violación que serán objeto de exposición y análisis en la parte considerativa de este fallo. La autoridad designada como responsable remitió el expediente de primera instancia, y los quejosos aportaron copia certificada de la sentencia

reclamada y de otras constancias procesales. De acuerdo con dicha documentación es pertinente exponer, a título de antecedentes, lo siguientes: Los señores Carlos R., Jesús María y Lucas Cantú comparecieron en 20 de julio de 1946, ante el Juez Primero de Letras del Ramo Civil de Monterrey, N. L., a promover contra las señoras Elisa Juangorena Vda. de Escamilla y Ofelia Escamilla de Acuña, señoritas María de la Luz y Elisa Escamilla y señor Humberto Escamilla, interdicto para recuperar parte de unos terrenos y para retener otra, daños y perjuicios y costas del juicio. Expresaron en su demanda que en el año de 1897 su tío político señor Martín Martínez adquirió en el bosque de Santo Domingo diversas extensiones de terreno que amparó con derechos de bosque, equivalentes a 7 días 11 horas y 15 minutos, medida de extensión que se usó en esa época; que esta propiedad la transmitió por sucesión a su esposa Concepción Cantú Martínez, quien la recibió como adjudicataria el 17 de septiembre de 1902, habiendo disfrutado de sus bienes sin perturbación alguna; que a su muerte los instituyó herederos, carácter con el cual han poseído sin interrupción, pacífica, públicamente y de buena fe, entre otros, un terreno mayor de dicho bosque en el que se formaron dos lotes pequeños al ser trazada la carretera de Circunvalación cuya apertura tuvo lugar mas o menos entre los años de 1936 y 1938, lotes que son materia del juicio; que estos lotes están señalados con los números 1 y 2 del croquis que anexan cuya extensión aproximada es de 58,000 metros cuadrados; que los demandados con anterioridad habían respetado su posesión pero que, en los primeros días del mes de mayo de 1946, la invadieron y tendieron una cerca de alambre que partiendo del punto A del croquis aludido y siguiendo el rumbo de la carretera Circunvalación hacia el sur, toca el punto C; que el límite de la propiedad de los-



10

demandados ha sido desde tiempo inmemorial la línea B.-A.-D del repetido croquis, donde aun existen señales evidentes de una cerca de alambre de púas; que además, los reos procedieron a destruir unos sembradíos y sacaron las mohoneras que marcaban los límites de su propiedad; que no conformes aun han amenazado de que los despojarán del lote número 2; que en los términos del artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles les compete el interdicto para recuperar la posesión del terreno de que se les ha perturbado y para retener el otro, con cuyo despojo se les ha amenazado. Los demandados negaron en su contestación que los actores hubieran poseído los lotes materia del interdicto, puesto que esas tierras jamás pertenecieron a sus causantes sino al señor Santos Escamilla de quien adquirieron por venta y cuya posesión la tuvieron hasta el año de 1933 en que fueron ocupadas de propia autoridad por el Jefe de la Séptima Zona Militar General Juan Andrew Almazán, quien destruyó las cercas que las limitaban hasta no dejar huella e hizo construir la carretera de Circunvalación por el lugar en que se encuentra dentro de los mismos terrenos; que por gestiones del señor Santos Escamilla y posteriormente de ellos, el Presidente de la República les devolvió en su totalidad las tierras, mediante resolución a la que se dió cumplimiento en lo de marzo de 1946 en que tuvo lugar la diligencia de entrega y a la que asistió el señor Carlos Cantá como representante de la Sucesión de su tía la señora Concepción Cantá Vda. de Martínez, sin que hasta la fecha haya reclamado en ninguna forma el acto de autoridad del comisionado del Presidente de la República que les hizo entrega de los terrenos objeto del interdicto y que en la fecha de la devolución no se encontraban ocupados por los actores; que el señor Carlos Cantá a pesar de haber tenido conocimiento de que las tierras no les pertenecían puesto que con anterioridad se les había entre-

gado a ellos, se introdujo en la porción que queda fuera de la carretera Circunvalación colocando dos tejabanos portátiles de madera y otros objetos; advirtieron, que durante mas de siete años en que las tierras fueron mantenidas bajo el control de la Séptima Zona Militar no fueron defendidas ni por la señora Concepción Vda. de Martínez ni por los actores, ni realizaron gestión alguna en cuanto a la expropiación que pretendió decretar el Gobernador del Estado en 23 de octubre de 1944, pues solamente hasta cuando obtuvieron la resolución Presidencial favorable y previa demostración a las autoridades de sus derechos de propiedad es cuando han pretendido despojarlos; que los actores no han probado ni podrán probar su calidad de propietarios o de poseedores y ni siquiera que han poseído por mas de un año a contar retrospectivamente de la fecha de la presentación de su demanda, por lo cual la acción de interdicto que ejercitan debe declararse improcedente. Recibidas las pruebas de las partes y los alegatos de los demandados, el Juez de los autos pronunció sentencia cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "Primero.- La parte actora o sean los señores Carlos R. Jesús María y Lucas Cantá, no probaron la acción ejercitada; los demandados señora Elisa Juangorena Vda. de Escamilla y señoritas María de la Luz y Elisa Escamilla, sí justificaron sus excepciones que hicieron valer en este interdicto; en consecuencia.- Segundo.- Se declara improcedente este interdicto que promovió la expresada parte actora contra las personas demandadas que se acaban de mencionar, a que se refiere el escrito inicial de demanda en la forma y términos que se han expresado en los considerandos de esta sentencia. Tercero.- Se deja a la parte actora sus derechos a salvo para promover, si le conviene su demanda de propiedad o posesión definitiva.- Cuarto.- Es improcedente asimismo el interdicto de retener que promueve la parte actora y que se -



refiere al terreno en donde enclavó dos tejabanos, improcedencia esta que se funda especialmente en lo que se establece en el considerando quinto de esta resolución, dejándole igualmente a la parte actora sus derechos a salvo para que promueva la demanda de propiedad, si es que así le conviene.- Quinto.- Se condena a la misma parte actora a las costas de este interdicto.- Sexto.- Notifíquese". Para desestimar la acción de interdicto de recuperar, el Juez declaró que los demandantes no habían probado tener con anterioridad la posesión, pues la única prueba que aportaron fue la documental, consistente en los planos, croquis y documentos que acompañaron a su demanda, toda vez que la testimonial y de inspección judicial no fueron desahogadas; que el plano que obra a fojas 1 es una copia heliográfica que no está firmada por ingeniero responsable ni certificada; que en ella se hace figurar con lápiz rojo parte de la carretera Circunvalación del parque Anáhuac, cuya construcción se realizó mucho tiempo después de la fecha del plano; que además, no se demuestra que el plano se hubiera levantado de acuerdo con los datos de la titulación, puesto que los actores no presentaron sus títulos de propiedad; que, por otra parte, el plano no fue reconocido por los demandados, ni se trata de un documento público, ni constituye -- prueba apta para la posesión. Que el plano que obra a fojas dos, aun cuando está certificado por el Jefe del Departamento de Fomento y Obras Públicas del Gobierno del Estado, es una copia de otra copia, según en el mismo se expresa, de un proyecto para la formación del parque Anáhuac y que carece de las firmas de los autores del proyecto, sin que se haya acreditado si tal proyecto fue o no en definitiva el que se realizó en dicho parque. Que el plano y certificación que obran a fojas 3 y 4, se refieren a la venta que realizaron los señores Santos Escamilla y Miguel Silva

en lo. de mayo de 1942, respecto de un terreno que no forma parte de los que son materia de la litis, por lo que son inconducentes para la prueba de la posesión. Que idéntica consideración procede en cuanto a los documentos siguientes: copia de la escritura de venta concertada entre los señores Manuel Silva y Domingo Valdez; copia certificada de la escritura de venta otorgada por el señor Lucas Cantá en favor del licenciado Santiago Roel, y copia certificada relativa a la venta celebrada por los señores Santiago Roel y Domingo Valdez. Que del acta levantada en 6 de mayo de 1946 por el Alcalde Segundo Judicial de San Nicolás de las Garzas en funciones de notario y del croquis anexo, aparece que el terreno que se describe en la demanda como lote 1, se encontraba cercado por los demandados y en posesión de estos, por lo que no puede probar la posesión en favor de los actores; que igualmente el acta notarial levantada por el mismo funcionario en lo. de mayo de 1946, por orden de los demandados, también demuestra que el terreno designado en la demanda como lote dos, era poseído por dichos demandados; que la copia certificada relativa a la sentencia pronunciada en 5 de noviembre de 1933 por el Juez de Letras del Ramo Civil de Monterrey, N. L. que declaró válido el testamento otorgado por la señora Concepción Cantá Vda. de Martínez en favor de los actores, no alude para nada a que haya sido propietaria de los terrenos cuya posesión discuten sus herederos. Que por lo que se refiere al interdicto de retener la posesión, cabe advertir, que en autos está probado que el doctor Carlos Cantá colocó, en 30 de abril de 1946, dos tejabanos en el terreno designado como lote 2; que tal acto no implica tener la posesión, tanto mas cuanto que los demandados presentaron al juicio sus títulos de propiedad y los de sus causantes debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad, y además, el



acta de lo. de marzo de 1946, de la cual consta que el ingeniero Meltis en representación de la primera autoridad del país, puso a los demandados en posesión de los predios de acuerdo con los planos y dictámenes correspondientes; que, por tanto, es evidente que los reos tenían la posesión que no perdieron por el simple hecho de que un tercero se hubiera introducido para colocar unos tejabanos, situación que por lo demás implica actos tendientes al despojo que no pueden ser sancionados. Observó, finalmente, que se encuentra probado en autos que los terrenos donde se encuentra el parque Anáhuac estuvieron bajo el dominio y control de las autoridades militares desde 1932 hasta 1944 aproximadamente, fecha en que empezaron a ser devueltos a sus propietarios entre los cuales se encuentran los demandados; que conviene citar la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia conforme a la cual para que proceda el interdicto de recuperar la posesión se requiere la posesión pacífica de una cosa raíz y el despojo que haya sufrido el actor por parte del demandado; pero que no puede constituir despojo la privación de la posesión del inmueble cuando tuvo lugar por órdenes o en cumplimiento de una resolución de autoridad judicial que debe ser combatida por los medios legales; que por tanto, si las autoridades agrarias entregaron a los demandados los terrenos en disputa en cumplimiento de una resolución presidencial, el interdicto es improcedente. Interpuesto el recurso de apelación, los quejosos promovieron la recepción de la prueba testimonial y de inspección, las cuales fueron desahogadas; el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León pronunció la sentencia que es materia de este amparo, en virtud de la cual confirmó en todas sus partes el fallo recurrido y condenó a la parte actora al pago de las costas -

causadas en ambas instancias.

TERCERO.- Se admitió la demanda y se turnó el expediente al Ministerio Público quien formuló su pedimento solicitando la denegación del amparo. Se emplazó a los terceros perjudicados por conducto de la autoridad responsable para que comparecieran a este juicio de amparo, habiendo comparecido por escrito de 24 de junio de 1947 en el que expusieron lo que a sus derechos conviene.

CUARTO.- La parte quejosa presentó en 7 de junio de 1951, 12 de enero, 14 de mayo, 10 de septiembre y 3 de diciembre de 1952, 3 de marzo, 6 de junio y 28 de julio de 1953, escritos para los efectos del artículo 182 pidiendo se pronunciara sentencia; turnado el expediente al Ministro Mariano Azuela se formuló proyecto de sentencia y, previa distribución del mismo se citó para audiencia de discusión y resolución.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- La existencia de la sentencia reclamada quedó legalmente acreditada mediante copia certificada de la misma aportada por la parte quejosa a este juicio de garantías.

SEGUNDO.- Expresan los quejosos que la autoridad designada como responsable al desestimar los agravios que formularon contra la sentencia de primera instancia, violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, por los conceptos siguientes: a).- Porque consideró que el plano que obra a fojas uno, que presentaron como prueba para acreditar en su favor la posesión de los terrenos materia del interdicto, no es un documento público sino una copia heliográfica sacada de un plano que tampoco se encuentra autorizado; que tal apreciación infringe los artículos 304 y 306 del Código de Procedimientos Civiles, ya que el plano fue tomado del ori-





ginal que existe en los archivos públicos, y por tanto, constituye un documento público de acuerdo con la fracción III del artículo 304 del ordenamiento legal mencionado. b).- Porque negó valor probatorio al plano que obra a fojas dos, en el que se les reconoce como poseedores y propietarios, no obstante de que aparece certificado por el Jefe del Departamento de Fomento y Obras Públicas del Estado y que, habiendo sido sacado del original que figura en los archivos de dicha dependencia, se trata también de un documento público atento lo dispuesto por la fracción V del artículo 304 del Código de Procedimientos Civiles. c).- Porque afirma en su sentencia de manera inexacta que el señor Santos Escamilla no figura como parte en una de las escrituras de venta otorgadas por diversas personas, en las que se les reconoce como propietarios y poseedores, hecho este que se corrobora con otros documentos que presentaron, como el oficio de la Junta Central Catastral del Estado, del que se desprende que el señor Carlos R. Cantú es reconocido como poseedor y propietario de un lote de terreno ubicado dentro del parque Anáhuac; que del mismo modo consta de las actas levantadas por el Alcalde Segundo Judicial de San Nicolás de las Garzas en funciones de notario por ministerio de la ley, su posesión y el despojo posterior de que fueron víctimas. d).- Porque no examinó documentos que, aunque fueron allegados por los demandados, son favorables a sus intereses, y en cambio, tomó en cuenta pruebas deleznable de sus contrarios, como sus títulos defectuosos de propiedad que no es el caso analizar en un interdicto. e).- Porque al examinar esos títulos y el acta relativa a la diligencia de la demarcación de linderos del predio el "Nogalar", concluyó que los actores no habían probado los hechos posesorios ni los de despojo, atribuyendo valor probatorio a los títulos de los -

demandados porque en su concepto no solo prueban el dominio sino que también establecen una presunción de la posesión, siendo que por disposición expresa del artículo 717 del Código de Procedimientos Civiles está prohibido al sentenciador admitir pruebas sobre la propiedad. f).- Porque hizo ilegalmente uso del arbitrio que la ley le confiere, al negar eficacia probatoria a las declaraciones de los testigos que presentó para acreditar la posesión, a pesar de que dos de ellas son uniformes en el sentido de que tenían dicha posesión. g).- Porque estimó que la prueba de inspección judicial no es idónea para justificar la posesión, puesto que no se puede dar fe de que se hayan realizado los actos sucesivos de tenencia material de la cosa, pero que tal prueba corroborada por las demás demuestra que existían vestigios de haberse destruido las cercas y arrancado mohoneras y postes en el terreno que poseían y que les fue arrebatado. h).- Porque no tomó en cuenta que de las copias certificadas de los informes de los ingenieros Antonio Meltis y Agustín Barragán y del escrito de contestación a la demanda, aparece que tanto los demandados como su causante confesaron que los actores tenían la posesión aun cuando quejándose maliciosamente de que era una invasión que sufrían. i).- Porque consideró que los lotes de terreno materia del interdicto fueron entregados a los demandados por el ingeniero Antonio Meltis en la diligencia de confirmación de la posesión que tuvo lugar en lo. de marzo de 1946, no obstante de que esa llamada entrega de posesión no se verificó, porque de acuerdo con sus pruebas, en abril y mayo del mismo año ellos poseían los terrenos y j).- Porque interpretó ilegalmente el informe o reconocimiento del ingeniero Antonio Meltis como una entrega de propiedades en favor de los demandados, sin tener en cuenta que estos confesaron al propio señor Meltis



que el señor Carlos R. Cantú les estaba invadiendo parte de esas propiedades, aun cuando no debe tomarse como invasión lo que realmente disfrutaban con perfecto derecho de propietarios y cuya posesión de ninguna manera podía serles arrebatada en una simple diligencia por empleados del Departamento Agrario que no son autoridad competente para el caso.

El Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León expresó, al respecto, que el plano que obra a fojas uno es un documento público puesto que no está autorizado, firmado y expedido por funcionario público que tenga derecho de certificar, ni lleva el sello de la oficina respectiva, pues se trata de una simple copia heliográfica sacada de un plano que -- tampoco estaba autorizado. Que para negar eficacia probatoria al plano que obra a fojas dos, basta reproducir el razonamiento expuesto, con la sola circunstancia de que -- aun cuando la copia aparece certificada por el Jefe del Departamento de Fomento y Obras Públicas del Gobierno del Estado, no se demostró que dicho funcionario estuviera autorizado para expedirla en los términos estrictos del artículo 304 fracción II del Código de Procedimientos Civiles. Que no es exacto que de los documentos exhibidos con la demanda aparezca que el señor Santos Escamilla y los demandados hubieran confesado que los señores Cantú estaban en posesión de los terrenos objeto del interdicto. Que el acta levantada a solicitud de los actores por el Alcalde Segundo Judicial de San Nicolás Las Garzas, en funciones de Notario, carece de valor probatorio porque en la diligencia a que se refiere no se dió intervención alguna a los demandados, ni constituye un reconocimiento o inspección practicada en los términos y con los requisitos exigidos por la ley; que, además, de su contenido solo consta en concreto

que los señores Cantá fueron quienes afirmaron ante el Notario que ellos poseían los lotes. Que en cuanto al acta levantada por el mismo funcionario a petición de los demandados, no prueba la posesión que alegan los señores Cantá, ya que en ella no se les menciona en forma alguna como poseedores o colindantes de los terrenos que cercaron los demandados, hecho que ejecutaron de acuerdo con la entrega de sus propiedades por parte del ingeniero Antonio Meltis y según plan autorizado que obra en autos. Que por lo que se refiere a los títulos de propiedad presentados por los actores, cabe observar, que si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 717 del Código de Procedimientos Civiles, en ningún interdicto se admitirán pruebas sobre la propiedad, sino solo las que versen sobre el hecho de la posesión, también es cierto que según jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, las escrituras de propiedad engendrán la presunción de posesión del bien raíz a que se refieren. Que la parte actora presentó como testigos a los señores José G. Cantá, Pedro Villareal, Roque Arteaga y Severo Garza Salinas; que los dos últimos al contestar la quinta pregunta del interrogatorio declararon que no sabían qué personas estaban en posesión de los terrenos; que por lo que hace a los otros dos testigos, el primero o sea el señor José G. Cantá, contestó a la misma pregunta que el doctor Carlos Cantá y sus hermanos tenían la posesión, por lo que se refiere a la porción del terreno que está fuera de la carretera de circunvalación, porque la que está dentro, fue cercada hace 8 o 10 meses por los herederos o familiares del señor Santos Escamilla; que como se advierte, no afirma que los actores hubieran poseído por mas de un año; que el testigo Pedro Villareal declaró que el doctor Carlos Cantá y hermanos son quienes han estado en posesión de los terrenos descritos, pero que su dicho además



de ser singular, está contradicho por la respuesta que dió a la décima pregunta cuando aseguró que una parte de los terrenos fueron invadidos por los herederos de don Santos Escamilla; que por ende, la prueba testimonial es ineficaz. Que en cuanto a la prueba de inspección judicial practicada en segunda instancia, además de no haber llevado al ánimo del Magistrado que la practicó la convicción de que los actores hayan tenido la posesión del lote número 1, debe tenerse en cuenta el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de que con la prueba de inspección ocular no puede acreditarse la posesión de unos terrenos, porque esa prueba no es idónea para el efecto, ya que el funcionario judicial que la practica en un momento dado no puede dar fe de que se hayan realizado sucesivos los actos de tenencia material de la cosa o goce del derecho en que consiste esa posesión que es un hecho continuo (Tomo 77 Pág. 3323 del Semanario Judicial de la Federación). Por último, expresa la autoridad responsable, que en el sexto agravio formulado por la parte actora se vuelve a impugnar la calificación hecha por el juez a quo del acta de posesión levantada por el Ingeniero Antoni Meltis, comisionado de la Delegación Agraria, pero que dicho agravio no es fundado.

Para esclarecer los conceptos de violación a estudio es pertinente advertir que el acta de lo. de marzo de 1946 levantada por el Delegado Agrario ingeniero Antonio Meltis para devolver las propiedades de las sucesiones del señor Santos Escamilla, es del tenor siguiente: "En el lugar conocido por Alberca del Nogalar, en el Predio de este nombre, en el llamado Parque Anáhuac, de la Ex-Hacienda de Santo Domingo, Municipio de San Nicolás de las Garzas, del Estado de Nuevo León, siendo las catorce horas del día primero de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, se reu-

nieron: el C. Ing. Antoni Meltis, comisionado por la Delegación Agraria, Oficina de Inspección y Secretaría General del Departamento Agrario, Srta. María de la Luz por sí y en representación de sus hermanos, actualmente dueños de lo que fue propiedad de Santos Escamilla; Dr. Carlos R. Cantú y Cantú, colindante del terreno "El Nogalar"; Sr. Luis Cantú, en representación del C. Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza, todos ellos con el objeto siguiente: manifiesta el Ing. Meltis que ha sido Comisionado por el C. Delegado Agrario en el Estado por medio de su oficio número 1422, de fecha 27 de febrero próximo pasado, para que, en atención al oficio número 235.111 del quince del mismo mes, girado por el C. Jefe de la Oficina de Inspección, y al Memorandum número 20084 de enero nueve del corriente año, girado por el Secretario General del Departamento Agrario, proceda a demarcar los linderos de la propiedad que fue de Santos Escamilla y que parcialmente fue invadida por la Séptima Zona Militar cuando estuvo al frente de ella el C. General de División Juan Andrew Almazán, que además, sigue manifestando el Ing. comisionado el oficio primeramente mencionado recomienda que la referida demarcación se practique de conformidad con los resultados finales del estudio practicado por el régimen de propiedad de Santos Escamilla y de sus respectivos colindantes, así como tomando en consideración los terrenos que dicho señor tuvo en posesión hasta antes de mil novecientos treinta y tres, fecha en que se inició la invasión de la Séptima Zona; que asimismo se recomienda sean notificados oportunamente todos y cada uno de los interesados y colindantes. Se hace constar desde luego que no obstante la segunda notificación, la Séptima Zona militar y el representante de la Sra. Juana Vidaurri de Martínez, no se han hecho presentes. Acto seguido, y teniendo a la vista el plano proporcionado por la



Delegación, demostrativo de las invasiones hechas al predio de referencia, se procedió a identificar y demarcar - todos y cada uno de los vértices del predio multicitado, cuya descripción es la siguiente: se comenzó el caminamiento en el vértice extremo Norte sobre el camino de Santo Domingo..... Todos los terrenos comprendidos a la derecha del caminamiento que se han descrito, son los que se consideran pertenecientes al predio que fue propiedad de Santos Escamilla y ahora de sus hijos; y a la izquierda las siguientes colindancias: del punto 1 al 3, (que es el sendero conocido como de la comunidad), terrenos pertenecientes a los herederos de Concepción Cantú Vda. de Martínez, o sea la propiedad original de Martín Martínez, de la 3 a la 5, propiedad de Domingo y Dionisio Garza; de la 6 a la 7, propiedad de Doña Juana Vidaurri de Martínez (antes Patricio Milmo), y por último, de la 7 a la 1, terrenos de San Nicolás de Los Garza, camino a Sto. Domingo de por medio.- Terminando el recorrido anterior los presentes, a sugerencia del comisionado, fueron conformes en levantar la presente para constancia de lo hecho manifestando el Dr. Cantú que no está conforme con la localización y demarcación de los linderos de la parte Oriental descrita y que abarca de los puntos 1 al 5, los que considera - que fueron de la propiedad de los herederos de Concepción Cantú Vda. de Martínez, por haberlos ya vendido. Dentro del perímetro descrito, se encuentra la zona de treinta - (30) hectáreas que la Comandancia de la Séptima Zona Militar tuvo invadidas, y que ya con anterioridad, y atendiendo a las órdenes expresas del C. Presidente de la República, en forma virtual devolvió a sus legítimos propietarios, abandonando el terreno, devolución que hoy se legaliza con la presente diligencia. En uso de la palabra la Srta. María de la Luz Escamilla expresó, que en su propio nombre

y en el de sus hermanos, está conforme con la localización y demarcación hecha por el Sr. Ing. Antonio Meltis, por estimarla apegada a la realidad, y que desconoce en lo absoluto los derechos alegados por el Dr. Cantú. No habiendo otro asunto que hacer constar y previa la conformidad de los presentes se levanta la presente siendo las diecisiete horas del día de la fecha, firmando para su constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Damos fe.- El representante de la Delegación Agraria".

Esta Sala Auxiliar no encuentra justificada la demanda de amparo. El artículo 721 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, establece que compete el interdicto al que teniendo la posesión civil o precaria de las cosas o derechos a que se refiere el artículo 712, haya sido perturbado de ella por actos que manifiesten la intención notoria o inequívoca, de inquietarle o despojarle y al que ha sido despojado de dicha posesión. Ahora bien: Aun cuando fueran fundados los conceptos de violación referidos a la desestimación por parte de la autoridad responsable de las pruebas que aportaron los actores para acreditar la posesión por más de diez años, tales pruebas solo acreditarían que la posesión la tuvieron hasta el 10. de marzo de 1946 en que el Comisionado del Departamento Agrario devolvió los terrenos a los demandados en cumplimiento de una resolución presidencial; la posesión obtenida de tal manera no implica ni despojo ni actos perturbatorios, toda vez que los interdictos han sido establecidos para proteger a particulares de actos de particulares, pues cuando interviene una autoridad, existen en nuestra legislación, medios jurídicos especiales de protección de los derechos de los particulares, que culminan con el juicio de amparo, por el cual se controla la legalidad de los actos de autoridad. La Suprema Corte de Justicia-





ha pronunciado entre otras la ejecutoria siguiente: "De acuerdo con el artículo 1185 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, expedido en 1884, para que proceda el interdicto de recuperar, es indispensable que el que lo promueva haya sido despojado de la posesión por medio de violencia o por vías de hecho; y como el artículo 1186 del propio ordenamiento, con toda claridad expresa que se considera violencia cualquier acto por el cual una persona usurpa de propia autoridad la cosa o derecho materia del interdicto, es claro que si un tercero obtiene la posesión de determinado inmueble, en cumplimiento de una resolución judicial, no usurpa dicha posesión de propia autoridad, y no habiendo mediado dicha violencia el despojado no puede intentar el interdicto de recuperar, y al reconocerlo así la autoridad judicial no incurre en la violación de las garantías individuales que establece el artículo 14 de la Constitución Federal". (Tomo XXXIX, Pág. 278). Esta Sala Auxiliar al resolver el amparo directo - número 4211/50 promovido por la señora Juana Turrubiarres de Guerrero expresó: "En los términos del artículo 16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí, de contenido idéntico al 16 del ordenamiento procesal del Distrito Federal, la procedencia de la acción, en el interdicto de retener la posesión, requiere que la perturbación consista en actos preparatorios tendientes directamente a la usurpación violenta o a impedir el ejercicio del derecho. No surtiéndose tal perturbación si el demandado se concretó a solicitar la intervención del Ministerio Público a fin de que hiciera la consignación que estimara procedente en relación con los hechos materia de su denuncia, pues tal solicitud no puede conceptuarse como un acto preparatorio tendiente directamente a la usurpación violenta o a impedir el ejercicio del derecho del actor, por lo que en tal caso no se pueden tener por satis-

fechos los extremos del artículo 16 citado. La institución del interdicto responde, principalmente, al propósito de evitar que las personas se hagan justicia por propia mano; y el que hace su denuncia al Ministerio Público, lejos de acudir al sistema proscrito de justicia privada, requiere mediante su función, la intervención regular de la autoridad". En el caso concreto, el acta de devolución de bienes levantada por el Ingeniero Meltis cuya validez no ha sido discutida por las partes, prueba que la Séptima Zona Militar invadió los terrenos propiedad de los demandados, quienes ocurrieron ante el Presidente de la República para que hiciera cesar tal perturbación y que la zona militar había devuelto virtualmente los terrenos al haberlos abandonado; por tanto, si el Departamento Agrario acatando disposición expresa del C. Presidente devolvió a los demandados sus pertenencias no sin antes examinar los títulos de propiedad y planos respectivos, cualesquiera irregularidad cometida por esta autoridad al cumplir la resolución presidencial debió ser combatida por medios jurídicos que culminaran con el juicio de amparo y no acudir al interdicto, puesto que el perjuicio que causan los actos de autoridad solo puede ser reparado a través del juicio constitucional, y la desposesión que en su caso hubieran sufrido los actores como consecuencia de la diligencia de delimitación de las propiedades cuya devolución se confirmó en este acto, debió ser reparado por tales medios jurídicos. Procede, pues, negar a los quejosos la protección constitucional solicitada, dejando a salvo sus derechos para que ejerciten las acciones de propiedad o posesión definitiva si así conviniere a sus intereses.

TERCERO.- Afirma la parte quejosa que la autoridad responsable violó en su perjuicio los artículos 92, 94 y 727 del Código de Procedimientos Civiles al haberla condenado al pago de las costas de ambas instancias. Teniendo en --

18



cuenta que en los términos de los preceptos legales mencionados siempre será condenado en costas el litigante que no obtenga resolución favorable sobre ninguno de los puntos de su demanda, el concepto de violación es injustificado.

Por lo expuesto, con fundamento en las disposiciones legales citadas y en los artículos 103 fracción I y 107 fracciones I, II y V de la Constitución Federal, se resuelve:

I.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los señores CARLOS R., JESUS MARIA Y LUCAS CANTU contra la sentencia definitiva pronunciada en 6 de mayo de 1947 por el Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, en la apelación interpuesta en el interdicto sobre resuperar y ~~refener~~ <sup>reñer</sup> la posesión, respectivamente, de dos porciones de terreno, promovido por los repetidos quejosos contra las señoras Elisa Juangorena Vda. de Escamilla y Ofelia Escamilla de Acuña, señoritas María de la Luz y Elisa Escamilla y señor Humberto Escamilla.

II.- Notifíquese, y con testimonio de esta resolución devuélvanse a la autoridad responsable los autos que remitió y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así resolvió la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Angel González de la Vega, Felipe Tena Ramírez, Mariano Azuela (Ponente), Rafael Matos Escobedo y --- Juan José González Bustamante, firmando el C. Presidente y los demás Ministros con el Secretario que autoriza.


PRESIDENTE:


ANGEL GONZALEZ DE LA VEGA

MINISTROS:


FELIPE TENA RAMIREZ.

MARIANO AZUELA.

  
RAFAEL MATOS ESCOBEDO

  
JUAN JOSE GONZALEZ BUSTAMANTE

SECRETARIO:

  
EFRAIN PENICHE LOPEZ

6 MAY 1954

En..... por lista de la misma fecha se  
notificó la resolución anterior, a los interesados  
y al Ministerio Público Federal.

